

El asalto a la embajada mexicana en Ecuador

Luis Hernández Navarro

La Jornada

16 de abril de 2024

El ilegal asalto a la embajada mexicana en Ecuador forma parte de la campaña del presidente Daniel Noboa para ganar la consulta popular y el referendo del próximo 21 de abril, y abrirle paso a su reelección en febrero próximo.

No le importa pasar por encima del derecho internacional o que su país sea condenado por otras naciones y la OEA. Lo que busca es acrecentar su popularidad demostrando fuerza y firmeza. A su manera, sigue la ruta fijada por mandatarios como Donald Trump, de Estados Unidos; Jair Bolsonaro, de Brasil; Javier Milei, de Argentina, y Nayib Bukele, de El Salvador. Se trata de no pedir perdón ni permiso.

Noboa es un junior de 36 años, nacido en Estados Unidos, hijo de un magnate bananero. Ganó las elecciones en noviembre pasado, con 52 por ciento de los votos. Sustituyó al también potentado Guillermo Lasso, quien renunció en medio de escándalos. Gobernará sólo 18 meses. Durante la contienda, el candidato Fernando Villavicencio fue asesinado por la banda de *Los Lobos*. El empresario hizo campaña (incluso en el debate) enfundado en un chaleco antibalas que también usa en sus promocionales. Su propuesta central es la lucha contra la inseguridad pública. En febrero de 2025 se efectuarán elecciones en las que él podrá competir.

El nuevo presidente ha hecho de las imágenes carcelarias el epicentro de su gobierno. Las fotografías y videos de reos sometidos y disciplinados, de espaldas, con uniformes naranjas, son parte de una escenografía estilo Zelensky o Bukele que acompañan a sus mensajes. Las grabaciones de policías golpeando jóvenes, obligándolos a besarse entre ellos o maltratándose se han viralizado.

La violencia ha escalado, igual que la industria criminal. En 2023 hubo en Ecuador 7 mil 800 homicidios y más de 40 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

“Lo que estamos haciendo hoy –dice Noboa en su propaganda– es una muestra de la lucha real contra el *narcoterrorismo* y estos grupos criminales, que creen que con base en miedo y en amenazas nos van a amedrentar. Nos quedan tres semanas para una consulta, para la cual ya los grupos *narcoterroristas* han dicho que están totalmente en contra. Están contra la extradición; en contra de que haya presencia militar en las cárceles, en contra de que las familias ecuatorianas tengan paz. Nosotros estamos a favor de devolver la dignidad a Ecuador.”

Al asumir, declaró que en su país existe un conflicto armado no internacional. Y añadió que, en términos prácticos, se vive una guerra contra el terrorismo, no limitada al *narco*, porque, según él, hay grupos terroristas no vinculados a esta industria.

De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la administración Biden apoyó desde el primer momento a Noboa. Una delegación de alto nivel visitó Quito la semana del 22 de enero, y el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado fue a principios de febrero. Mientras, la comandante del Comando Sur, general Laura Richardson, prometió un paquete de ayuda militar y policial de 93 millones de dólares. La asistencia sigue lo que

Richardson llamó una hoja de ruta de asistencia a la seguridad de cinco años (<https://shorturl.at/cDTU0>).

Si quiere relegirse, Noboa debe ganar la consulta popular y el referendo del 21 de abril. De las 11 preguntas a responder, cinco son para reformar la Constitución (referendo) y seis para modificar leyes.

Las medidas que se busca aprobar, refuerzan un Estado de excepción con mayor presencia militar contra el crimen. Además, legalizan la extradición; crean judicaturas especiales; abren la puerta al arbitraje internacional en inversiones y, en uno de los sueños húmedos del liberalismo, precariza la fuerza de trabajo mediante contratos de empleo por horas y a plazo fijo.

El allanamiento policial a la embajada mexicana en Quito, dos semanas antes de la consulta popular, y (según la Corte Nacional de Justicia) el ilegal y arbitrario arresto en su interior de Jorge Glas –ex vicepresidente de Ecuador con Rafael Correa y Lenín Moreno– al que México reconoció como asilado político, quiso ser justificada en nombre de esta guerra contra el *narcoterrorismo*. A Glas lo acusan de desviar fondos para la reconstrucción de Manabí por el terremoto de 2016, aunque él y su partido señalan (no sin razón) que él es víctima de persecución judicial.

Sin ser un apoyo incondicional, al arrancar el gobierno de Noboa se pactó una alianza en la Asamblea Nacional con el correísmo, fuerza mayoritaria en ese órgano. En noviembre de 2023, Correa anunció: Hay que tratar de lograr la unidad nacional. Añadió que la administración de Noboa contaba con el apoyo de la Revolución Ciudadana para las leyes que benefician al país. Su asambleísta Viviana Veloz fue elegida vicepresidenta de la asamblea. La detención de Glas precipitó una ruptura entre ambas fuerzas, anticipada desde mediados de marzo.

Mientras, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y su presidente, Leonardo Iza, señalaron que el asalto a la embajada de México es un acto alarmante que pone de manifiesto el autoritarismo de Noboa. Este acto fascista no sólo viola normas internacionales, sino que también atenta contra las relaciones diplomáticas de ambos países. Asimismo, llaman a votar *no* en la consulta popular.

La desfavorable correlación de fuerzas internacional del mandatario no quiere decir que vaya a perder la consulta. Por lo pronto, aunque hay muchos indecisos, las encuestas favorecen la propuesta del Ejecutivo. De ser así, más allá del descrédito diplomático que se ha ganado a pulso, la jugada de Noboa de involucrarse en su bandera nacional le habría dado resultado. Ojalá fallen los sondeos.

Twitter: [@lhan55](https://twitter.com/lhan55)

<https://www.jornada.com.mx/2024/04/16/opinion/015a1pol>